Datos del Expediente

Carátula: CHULENMAR S.R.L. C/ HUICI INGENIERIA S.R.L. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO

Fecha inicio: 28/05/2019

N° de Receptoría: MP - 8199 - 2016

N° de Expediente: 167574

Estado: Fuera del Organismo - En S.C.B.A.

REFERENCIAS

Sentencia - Folio: 1045

Sentencia - Nro. de Registro: 162

11/09/2019 - SENTENCIA DEFINITIVA

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

REGISTRADA BAJO EL N° 167 (S) F° 1045/1049

Expte.N°167.574 Juzgado Civil y Comercial N°1.-

En la ciudad de Mar del Plata, a los 11 días del mes de septiembre 2019, reunida la Excm. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: **“CHULENMAR S.R.L. c/ HUICI INGENIERIA S.R.L. s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO” - EXPTE.N°167.574** habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rubén D. Gérez y Nélida Isabel Zampini.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1°) **¿Es justa la sentencia dictada a fs. 135/8 y contra la cual la incidentista interpuso recurso de apelación mediante el escrito electrónico de fecha 25/09/2018 y la incidentada - concursada hizo lo propio mediante la presentación electrónica de fecha 08/10/2018?**

2°) **¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?**

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO:

I. Antecedentes:

A fs. 42 se presenta el Dr. Luis Raúl Togni, en su carácter de apoderado de **CHULENMAR S.R.L.**, promoviendo incidente de verificación de crédito en los autos **“HUICI INGENIERIA S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO” – EXPTE.N° 120.385** de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 de Mar del Plata, por el capital e intereses establecidos en

la sentencia firme y consentida dictada en los autos “**Chulenmar S.R.L. c/ Pescafox S.A. y otros s/ Cobro Ordinario de sumas de dinero**” – Expte.N°147.693, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 de Mar del Plata, en la suma de **U\$S 85.801,17** (capital: U\$S 62.450 e intereses: U\$S 23.351,17).

Señala que la concursada ocultó su estado falencial, ocultando el pasivo a los acreedores.

Ofrece prueba, solicita la eximición de costas, la verificación en moneda extranjera y la oportuna verificación del crédito.

A fs.47 se ordena sustanciar el incidente con la concursada por el término de diez (10) días.

A fs.53 se presenta el Dr. Jorge Alberto Callejo, en su carácter de apoderado de **HUICI INGENIERIA S.R.L.**, contestando el incidente promovido en contra de su mandante, solicitando el rechazo total con costas.

Niega y desconoce la totalidad de los dichos vertidos por la incidentista.

Afirma que no se ha dado cumplimiento con la carga de acreditar la causa del crédito, monto y privilegio, no alcanzando per se la sentencia dictada en otro órgano y sin control de la sindicatura.

Sostiene que el objeto social de su mandante no es el de afianzar operación de compraventa de terceras personas.

Ofreció prueba y solicitó el oportuno rechazo de la pretensión con costas.

A fs. 78 se ordena la apertura a prueba de las actuaciones por el plazo de veinte (20) días.

A fs. 103 se presenta la sindico CPN Maria Josefa Messina manifestando la necesidad de abrir a prueba el incidente y continuar su trámite.

A fs.121/3 se resuelve hacer lugar a la oposición a la producción de la prueba ofrecida por la incidentada, con costas a la vencida.

A fs. 132 se pasan los autos a dictar sentencia.

II. La sentencia recurrida:

A fs. 135/8 dictó sentencia vericatoria el sentenciante de grado, haciendo lugar a la demanda, declarando verificado el crédito insinuado a favor de Chulenmar SRL por la suma de U\$S 85.801,17. Impuso las costas al incidentista y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así hacerlo, señaló que el crédito insinuado resulta de una sentencia dictada en un proceso de conocimiento no atraído. Y que si bien debía permitirse el control multidireccional de todos los acreedores concursales, para el concursado ha adquirido el carácter de inmutable.

Así tuvo acreditada la causa y monto de la obligación insinuada. Sobre éste último, receiptó el importe pretendido por capital de U\$S 62.450, con más intereses moratorios a la tasa activa para préstamos en moneda extranjera percibida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, liquidados a partir del 16/07/2009 hasta la presentación del deudor en concurso preventivo; arrojando un importe total a verificar de U\$S 85.801,17.

Con relación a las costas, indicó que el principio general es imponerlas al tardío, salvo que la tardanza obedezca a razones y causas debidamente justificadas. Consideró que pese al incumplimiento de la denuncia y silencio guardado por el concursado, frente a la publicación edictal no puede el acreedor invocar ignorancia sobre el concursamiento del deudor y su deber de insinuarse al pasivo.

Finalmente, tomando como base regulatoria la suma de \$ 3.432.046,80 (cambio del dólar en razón de 1U\$S = 40\$), fijó los honorarios del Dr. Togni en la suma de \$ 171.600, los del Dr. Callejo en \$ 120.100 y los de la CPN Messina en \$ 30.100, con más sus aportes previsionales e IVA en caso de corresponder.

III. Recurso de la apelación de la incidentista:

Mediante la presentación electrónica de fecha 25/09/2018 la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue concedido en relación a fs. 139, fundado mediante el escrito electrónico de fecha 03/10/2018, y que fuera contestado por la concursada en el escrito electrónico de fecha 23/10/2018.

Dice que el recurso de apelación tiende a modificar exclusivamente la imposición de costas, desde que existió de parte de la concursada ocultamiento de su situación, y no demora o negligencia de parte de Chulenmar SRL en la verificación del crédito; considerando que deben ser soportadas por la concursada o en defecto de ello, en el orden causado.

Explica que la demora en la verificación tardía no obedece a negligencia del acreedor por no solicitar la verificación en tiempo y forma de acuerdo al art. 32 LCQ, atento que por el trámite del juicio de cobro y el desconocimiento de la deuda al contestar la demanda en el proceso de cobro, su parte se vería siempre obligada a llegar a la sentencia y luego solicitar la verificación; en razón de ello la conducta omisiva de Chulenmar SRL resulta ajena a su voluntad.

Asimismo, con cita de doctrina especializada, al acreedor que no es denunciado o no figura en la nómina que debe presentar el concursado, en este caso tampoco sería pasible de costas por insinuación tardía.

IV. Recurso de la apelación de la concursada:

Mediante la presentación electrónica de fecha 08/10/2018 la incidentada interpuso recurso de apelación, que fue concedido en relación a fs. 141, fundado mediante el escrito electrónico de fecha 17/10/2018, y que fuera contestado por la incidentista en el escrito electrónico de fecha 24/10/2018.

Manifiesta que es sabida la fijación de un límite temporal para el ejercicio de la acción de verificación tardía en el marco del concurso preventivo del deudor, ante la necesidad de delimitar el pasivo concursal en un momento dado, dando certeza a la situación patrimonial del concursado al evitarse la aparición sucesiva, en distintos y tal vez muy alejados momentos, de diversos e insospechados créditos insatisfechos, comúnmente llamados pasivos ocultos.

Advierte que el Juzgador no ha tratado ni mínimamente: a) el tiempo en que el incidentista pretendió insinuar su crédito; b) el sistema especial de la Ley 24.522 que determina un plazo de prescripción de dos años y los seis meses más introducido por la Ley 26.086 para deducir el pedido de verificación tardía para los créditos ajenos al fuero de atracción; c) la pretensión verificatoria nace con la apertura del concurso y no con el dictado de la sentencia de conocimiento opción elegida por el incidentista.

Señala que, conforme surge de los juicios respectivos, el incidente de verificación tardía interpuesto por el incidentista tiene fecha de iniciación el 08 de abril de 2016 y el concurso del incidentado fue iniciado el 24 de noviembre de 2011; es decir fue interpuesto 4 años y 5 meses más tarde.

Agrega que el *dies a quo* de la pretensión verificatoria nace con la fecha de apertura del concurso y no con el dictado de la sentencia de conocimiento sobre el crédito exigido, en razón de que a partir de dicho momento, el interesado tiene a su disposición los mecanismos específicos ya aludidos para reclamar el reconocimiento del derecho a la indemnización y la incorporación en la masa. La acción, dice, nace en dicha oportunidad.

Concluye que era innecesario aguardar en el Fuero Civil la sentencia firme, pudiendo anunciar en el concurso la existencia de su crédito. La carencia de toda insinuación o reserva en el concurso del incidentado hace a su presentación incidental extemporánea; sin que el Sr. Juez de grado haya ponderado esta circunstancia en su sentencia en crisis. Cuando el incidentista obtuvo su sentencia firme, los seis meses del art. 56 de la LCQ hubieron transcurrido en exceso, por lo que debe ser concedido y declarado la prescripción de su crédito.

V. Tratamiento de los agravios:

1.) Prescripción de la acción verificatoria:

Corresponde ingresar en el análisis del recurso de la incidentada – concursada, desde que su progreso tornaría abstracto entrar en la consideración del restante embate.

Conforme lo dispone el art. 56 de la ley 24.522 el pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso.

Y agrega en su séptimo párrafo que: *“Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante*

haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia.”

Como se advierte, la norma referida contiene un **plazo de prescripción** común para las acciones de todos los acreedores que no se hayan presentado a verificar, contribuyendo a delimitar el pasivo concursal en un momento dado, conllevando certeza a la situación patrimonial del concursado (Heredía, ***Tratado Exegético de Derecho Concursal***, T.2, ed. Ábaco, Bs.As., 2000, pág. 270).

Es crucial para la suerte del recurso destacar que se trata de un plazo de prescripción y no de caducidad, desde que resulta inadmisibile la declaración de oficio de la prescripción, en función de lo normado por el art. 2552 del CCyCN (Heredía, ob. cit., pág. 273); debiéndosela oponer dentro del plazo para contestar la demanda de conocimiento (art. 2553 del CCyCN).

En efecto, se ha resuelto que la letra de la ley es clara al referirse a que "*vencido esos plazos prescriben las acciones del acreedor*", por lo que no pueden los jueces prescindir de la literalidad de la norma. La expresión plural utilizada no deja duda de que se refiere a ambos plazos —el de dos años y el de seis meses, y que al vencimiento de tales términos, se produce la prescripción de la acción —no la caducidad— (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, "*Di Virgilio Elena s/ Concurso preventivo s/ Incidente de verificación promovido por Alderete Gladys Estela*", 24/4/2012, Centro de Información Judicial (<http://www.cij.gov.ar/>; misma sala, "*Aceros Zapla S.A. s/ Concurso preventivo s/ Incidente de verificación por A., R. y otros*", 12/02/2015, ED Digital n° 81904)

A la misma conclusión se arribó en el fallo plenario dictado por la Cám. Nac. de Apelaciones en lo Comercial en los autos "***Trenes de Buenos Aires SA s/Concurso Preventivo - Incidente de Verificación por Jimenez, Asunción Elsa***" dictado el 28 de Junio de 2016.

Vista la naturaleza de los plazos establecidos por la norma de aplicación al caso de autos y luego de una detenida lectura del escrito de contestación del incidente (ver fs. 53/60), no logro advertir que la incidentada – concursada haya opuesto la defensa de prescripción, luciendo extemporáneo su planteo recién en esta instancia revisora al momento de fundar su memorial (arts. 2552/3 del CCyCN) e inabordable por tratarse de un capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia (art. 272 del CPCC).

2.) Imposición de costas:

Despejado el camino verificadorio y ante la firmeza de lo decidido por el a-quo en todo lo restante, frente a la falta de agravio del concursado, corresponde ingresar en el análisis del recurso de la incidentista, quien dirige una sola crítica a la imposición de costas.

Desde la sustitución del art. 56 de la LCyQ efectuada por el art. 5 de la ley 26.086, y como ya transcribí en el punto anterior, no puede considerarse tardío al pretense acreedor que hubiera deducido el pedido de verificación dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia, cuando el título verificadorio fuera el pronunciamiento definitivo de un juicio tramitado ante un

tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21.

Enseña Pablo Heredia que “...cabe recordar que, como regla, al verificante tardío se le imponen las costas del incidente que promueve por la imputabilidad que se le atribuye en el retraso de su presentación al concurso, al haber omitido insinuarse tempestivamente en la ocasión aludida por el art. 14 inc. 3 LCQ. (122). Pues bien, la ley 26086 considera que esa imputabilidad no existe cuando el acreedor, en ejercicio de un *ius electionis* que la propia normativa concursal le concede, ha optado por continuar -sin atracción- el proceso de conocimiento que venía tramitando al momento de la apertura del concurso, para después concurrir a solicitar la pertinente verificación, dentro de un plazo determinado. Si actúa de ese modo no se lo considera tardío en cuanto a la imposición de las costas, por ausencia de imputabilidad en el retraso que justifique su carga. Lo que corresponde es que se las imponga por su orden si el incidente de verificación tardía es interpuesto hasta seis meses después de haber quedado firme la sentencia obtenida en el juicio de conocimiento, aunque ello ocurriese después de vencido el plazo de dos años de la denominada “prescripción concursal” (**Ley 26086: nuevo modelo en el régimen de suspensión y prohibición de acciones y en el diseño del fuero de atracción del concurso preventivo**”, Cita Online: 0003/012560 y JA, 2006-II-18)

Con vista en analizar el agravio esgrimido y al solo efecto de la responsabilidad por costas del presente incidente, considero que resulta posible que este órgano efectúe el cálculo del tiempo que se tomó el incidentista para deducir el incidente.

Siguiendo ese camino, advierto que el actor obtuvo sentencia de segunda instancia en los autos “**Chulenmar S.R.L. c/ Pescafox S.A. y otros s/ Cobro Ordinario de sumas de dinero**” – **Expte.Nº147.693** el día 17/07/2015, dictada por este mismo Tribunal, notificada por cédula el día 21/08/2015, adquiriendo firmeza el día 07/09/2015 (cfr. M.E.V. en www.scba.gov.ar; art. 34, 36, 278, 296, 299 y ccdtes. del CPC). Por su parte, se verifica que éste incidente fue promovido el día 05/04/2016, conforme luce del cargo de Receptoría General de Expedientes estampado a fs. 46vta.

Así las cosas, deduzco que el incidentista excedió el plazo de seis (6) meses establecido en la norma para no ser considerado tardío en su pretendida verificación de crédito, debiéndose confirmar, aunque por otros fundamentos, la condena en costas decidida por el sentenciante de grado (Baracat, “**Una visión del nuevo fuero de atracción en los procesos concursales (ley 26.086)**”, 13-07-2017; Cita: MJ-DOC-3462-AR | MJD3462).

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y como bien afirma el a-quo, la publicación de edictos crea la presunción iure et de iure de conocimiento del proceso universal por todos los interesados y la correspondencia que debe remitir el síndico no modifica en absoluto este escenario (“**Prescripción concursal, juicios iniciados y anoticiamiento del concurso**”, Casadío Martínez, Claudio A., Publicado en: RDCO 288, 18, Cita Online: AR/DOC/4206/2017).

Por todo lo expuesto, **VOTO POR LA AFIRMATIVA.**

A la misma cuestión la Dra. Nélide Isabel Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO:

Corresponde: **1º**) Desestimar los recursos de apelación interpuestos por la incidentista e incidentada en sus presentaciones electrónicas de fecha 25/09/2018 y 08/10/2018, respectivamente; **2º**) Imponer las costas de Alzada a cada recurrente por cada uno de sus recursos en su carácter de perdidosos (art. 68, 69 y ccdtes. del CPC, 278, 280 y ccdtes. de la ley 24.522); **3º**) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión la Dra. Nélide Isabel Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia, se dicta la siguiente

SENTENCIA:

Por los fundamentos brindados en el presente acuerdo: **1º**) Se desestiman los recursos de apelación interpuestos por la incidentista e incidentada en sus presentaciones electrónicas de fecha 25/09/2018 y 08/10/2018, respectivamente; **2º**) Se imponen las costas de Alzada a cada recurrente por cada uno de sus recursos en su carácter de perdidosos (art. 68, 69 y ccdtes. del CPC, 278, 280 y ccdtes. de la ley 24.522); **3º**) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904; 31 de la ley 14.967). **REGISTRESE. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE O POR CEDULA (art. 135 inc.12 del CPC).**-

-

-

-

RUBEN DANIEL GEREZ NELIDA ISABEL ZAMPINI

Pablo D. Antonini Secretario

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----

[Volver al expediente](#) [Imprimir](#) ^